

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL  
Juzgado del Trabajo V° Nominación

ACTUACIONES N°: 1709/18



H105014854692

**JUICIO: LUCENA RAMÓN FIDEL c/ GIACOSA A Y E S.R.L. Y GALENO  
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. s/ ACCIDENTE DE  
TRABAJO. Expte. 1709/18**

**San Miguel de Tucumán, 02 de febrero de 2024**

### **AUTOS Y VISTOS**

Para dictar sentencia definitiva en este expediente caratulado “Lucena, Ramón Fidel c/Giacosa A Y E SRL y Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/Accidente de trabajo”, expte. 1709/18, sustanciado ante este Juzgado del Trabajo de la V° Nominación, de cuyo estudio

### **RESULTA**

Mediante presentación del 26 de noviembre de 2018 se apersonó el letrado Federico José Domínguez, con el patrocinio del letrado Eduardo Posse Cuezco, en nombre y representación del actor Ramón Fidel Lucena, DNI 16.691.923, domiciliado en calle José Ingenieros N° 1200, B° Tiro Federal, San Miguel de Tucumán, según acreditó con el respectivo poder *ad litem*.

Expresó que, siguiendo instrucciones de su mandante, interpone demanda en contra de Giacosa A Y E SRL, con domicilio en calle Marina Alfaro N° 1215, San Miguel de Tucumán; y de Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 732, de esta ciudad.

Persigue el cobro de la suma de \$5.198.105 (pesos cinco millones ciento noventa y ocho mil ciento cinco) o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos, con más sus intereses, gastos y costas, en concepto de reparación integral por daños y perjuicios a causa de un infortunio de origen

laboral.

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 55, inc. 3, del CPL, indicó que el actor había ingresado a trabajar bajo dependencia de la firma Giacosa A Y E SRL (dedicada a la comercialización de materiales de construcción) el 1° de septiembre de 1993.

Asimismo, señaló que el demandante prestaba servicios como peón general (bajo la categoría de Maestranza C del CCT 130/75), con tareas de carga y descarga permanente de barras de hierro, bolsas de cemento y de elementos, en general, de gran peso.

Se desempeñaba con carácter permanente, en jornadas de trabajo que se extendían de lunes a sábados de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00; y la última remuneración mensual percibida ascendió a \$17.800 (presentación del 31 de julio de 2019).

Precisó que, a su ingreso bajo las órdenes de la empleadora, había realizado el examen preocupacional que determinó su plena aptitud física y la inexistencia de patologías incapacitantes o degenerativas.

Por otra parte, aseveró que la empresa no le proveía de elementos de seguridad ni cumplía las normativas de higiene y seguridad, según fue constatado en reiteradas ocasiones por la Secretaría de Estado de Trabajo.

Agregó que, como consecuencia de lo dicho, durante la relación laboral el actor sufrió de manera continua diversos traumatismos ocasionados por el desplazamiento de materiales pesados, que afectaron su columna y motricidad.

Así, el 30 de junio de 2016, mientras cargaba perfiles de hierro en el transcurso de su jornada de trabajo, el actor "sintió un intenso dolor en la columna, en la región lumbosacra, que lo dejó paralizado en un cuadro de padecimiento intolerable".

Explicó que el empleador denunció el hecho a Galeno ART S.A. y, después de algunos estudios y rehabilitación, fue dado de alta el 27 de julio de 2016.

Luego, el 10 de agosto de 2016, la Comisión Médica dictaminó que el actor no padecía de incapacidad alguna.

Sostuvo que de esa manera el actor tuvo que afrontar personalmente los costos de su tratamiento médico, incluida una intervención quirúrgica.

Por último, acotó que el 28 de julio de 2017 el demandante fue despedido por la empresa empleadora.

Concluyó que, de esta manera, la estructura generada por la Ley de Riesgos del Trabajo había dejado al trabajador incapacitado librado a su suerte.

A continuación, refirió que el actor consultó a un especialista de columna en forma particular quien le diagnosticó espondilolistesis severa. En consecuencia, le efectuaron un bloqueo y, posteriormente, fue sometido a una artrodesis instrumental para descompresión neurológica.

Indicó que el Dr. Dante Rizo determinó luego que, conforme al Baremo 478/98 de la Ley 24.241, el actor padecía de una incapacidad del 66,44%, total y permanente (informe del 31 de octubre de 2018), que lo excluía "definitivamente del mercado laboral".

Acápate aparte planteó la inconstitucionalidad de la opción excluyente prevista en el art. 4° de la Ley 26.773; de los arts. 1°, 2°, 3°, 12, 14, 15, 16 y 21 de la Ley 27.348; de cualquier tipo de intervención de las comisiones médicas previstas en los arts. 6°, 8° inc. 3°, 21, 22 y 46 de la Ley 24.557, y de los arts. 1°, 2°, 14 y 17 de la Ley 27.348, el Dto. 54/17 y normas concordantes.

Ello, según los fundamentos brindados y que doy por reproducidos en aras de la brevedad, sin perjuicio de su oportuno análisis.

Expresó que la pretensión reposaba en lo dispuesto por los arts. 1078, 1710, 1716, 1717, 1757, 1737, 1738, 1739 y 1746 del CCCN. De allí que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada -en tanto sujeto deudor del deber de seguridad- era civilmente responsable, y estaba obligada a la reparación plena del daño, en virtud de su omisión frente a la obligación legal de prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, así como evitar la producción de un daño.

De la misma manera, indicó que la empresa Giacosa A Y E SRL debía responder en su carácter de propietaria del establecimiento, en los términos del Código Civil y Comercial.

Afirmó que la patología del actor tenía relación directa con la modalidad de actividad en el establecimiento de la demandada y que el factor de atribución era la inadecuada mecánica -sistemática y permanente- de desplazamiento de materiales de gran peso.

Refirió que, como consecuencia del evento dañoso, que desencadenara la patología incapacitante, el actor sufría de una minusvalía total y permanente del 62,72% (porcentual referido únicamente a la enfermedad profesional).

Finalmente, con base en el art. 1.738 del CCC, ("indemnización integral por el daño sufrido comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante, y la pérdida de chance") estimó el *quantum* reclamado en las sumas de \$3.997.106,71 y 1.200.000, en concepto de disminución patrimonial y daño moral, respectivamente.

Invocó el derecho y pidió la admisión de la demanda.

Corrido el traslado de ley, el 26 de septiembre de 2019 se apersonó la letrada Micaela Barrionuevo Castro como apoderada de Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 732, San Miguel de Tucumán, según lo acreditó con el respectivo instrumento.

En forma previa, reconoció haber emitido un contrato de afiliación en favor de la empresa Giacosa A Y E SRL, por los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, instrumentado bajo el número 418413, vigente al momento del siniestro denunciado por el actor.

En su versión de los hechos, aseveró que su representada había cumplido cabalmente con sus obligaciones.

Destacó que su mandante había recibido, el 30 de junio de 2016, la denuncia del siniestro y brindado el tratamiento médico correspondiente por el episodio agudo denunciado.

No obstante, acotó, el actor fue derivado a la atención de su obra social, dado que la patología que presentaba en su columna lumbar era crónica (istmo de L5 línea hipointensa, en forma bilateral compatible con espondilólisis), con manifestaciones que no guardaban correlato etiopatogénico ni cronológico con el siniestro denunciado. En consecuencia, la patología era de carácter inculpable.

Hizo referencia a las actuaciones ante las Comisiones Médicas y negó que el accionante padeciera daño físico alguno como consecuencia de su actividad laboral o del siniestro denunciado.

Subsidiariamente, opuso defensa de falta de acción con base en la inexistencia de fundamento legal o contractual que permitiera traer a juicio y responsabilizar a su representada por el reclamo planteado.

Asimismo, estimó procedente la defensa de falta de legitimación pasiva (no seguro) frente a la acción incoada, por no haber celebrado contrato asegurativo alguno que amparara, como riesgo cubierto, la eventual responsabilidad por daños y perjuicios por infortunios laborales sufridos por los empleados de la demandada.

Rechazó la atribución de responsabilidad a su mandante en los términos del Código Civil y adujo al respecto que las imputaciones vertidas por el actor en el escrito de inicio eran abstractas, dado que no había explicado de qué modo los supuestos incumplimientos de la norma habrían ocasionado las presuntas dolencias denunciadas.

Acápita aparte, formuló la negativa en general y en particular de los dichos vertidos en la demanda y solicitó su rechazo, al tiempo que impugnó los rubros y la planilla practicada; contestó en extenso los planteos de inconstitucionalidad realizados por el demandante y se opuso a la aplicación de intereses requerida sobre un eventual capital de condena.

Por último, solicitó la aplicación de las leyes 24.307 y 24.432, y Dto. 1813/92, los efectos de la regulación de honorarios. Ofreció prueba instrumental y puso a disposición la documentación laboral y contable de su mandante en el domicilio de Av. Elvira Rawson de Dellepiane N° 150, 1° piso, Puerto Madero, Dique 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hizo reserva del caso federal y pidió el rechazo de la demanda.

Mediante presentación del 30 de septiembre de 2019 se apersonó el letrado Máximo Augusto Castro como apoderado de Giacosa A Y E SRL, CUIT 33-64443203-9, con domicilio en calle Marina Alfaro N° 1215, San Miguel de Tucumán, según lo acreditó con el respectivo instrumento.

Luego de negar en general y en particular los dichos vertidos en la demanda, brindó su versión de los hechos.

Afirmó haber cumplido con todas las normativas en materia de higiene y seguridad laboral, y respondido en forma correcta a todas las recomendaciones y observaciones que le hicieran tanto la ART como los organismos públicos sobre el tema.

Rechazó tener responsabilidad alguna por las dolencias, o bien, por el accidente, sufridas por el actor. Señaló que éste jamás reclamó faltas u omisiones en materia de higiene y seguridad, sea a su empleadora o a la ART y siempre argumentó que sus dolencias eran propias de su actividad laboral habitual.

Negó que los instrumentos acompañados revelaran el nexo causal entre la incapacidad establecida y las tareas desarrolladas por el señor Lucena. Del mismo modo se pronunció respecto de las Actas Digitales labradas por la Secretaría de Trabajo.

Por el contrario, refirió que de los dictámenes de las Comisiones Médicas se desprendía que las dolencias del actor no guardaban correlato etiopatogénico ni cronológico con el siniestro denunciado.

Acápate aparte, señaló que, según la documentación que acompañaba, el señor Lucena había sido asistido en numerosas oportunidades por episodios relacionados con sus tareas habituales.

Adujo que siempre fue atendido por la ART o la obra social y que, en ningún caso, se determinó o conminó a su mandante a cambiar de tareas al trabajador o realizar alguna medida preventiva adicional para evitar nuevos episodios como los denunciados. Añadió que, además, las lesiones habían sido calificadas como leves.

Como corolario de lo expuesto, estimó que no le cabía responsabilidad alguna en tanto y cuanto siempre había cumplido con las normas de higiene y seguridad, como la provisión de elementos de seguridad, entre otras.

Hizo reserva del caso federal. Puso la documentación laboral y contable de su mandante en el domicilio denunciado, y pidió el rechazo de la demanda.

El 28 de octubre de 2019, la parte actora contestó el traslado conferido de las defensas opuestas por la codemandada.

Por decreto del 19 de noviembre de 2019 se ordenó la apertura de la causa a prueba al solo fin de su ofrecimiento.

Al estar debatida la incapacidad del actor, el 17 de julio de 2020 se ordenó el sorteo de un Perito Médico Oficial. Se produjo el dictamen pericial previo dispuesto por el art. 70 del CPL, en el que el Dr. Adrián Cunio dictaminó que el señor Lucena padecía de una incapacidad parcial y permanente del 20,2% (1° de marzo de 2021).

Del acta de audiencia de conciliación prevista por el art. 69 CPL, llevada a cabo el 7 de diciembre de 2021, resultó la comparecencia del letrado apoderado del actor, únicamente. Se tuvo por intentado el acto y fracasada la conciliación. Se proveyeron las pertinentes pruebas.

Secretaría Actuarial informó sobre la producción de pruebas (14 de junio de 2023), de donde resulta que la parte actora ofreció: 1) Instrumental (producida). 2) Informativa (no producida). 3) Informativa (producida). 4) Informativa (producida). 5) Informativa (no producida). 6) Testimonial (producida). 7) Testimonial (parcialmente producida). 8) Confesional (producida). La demandada, por su parte, ofreció: 1) Instrumental - Reconocimiento - Pericial caligráfica (producida). Informativa (no producida). 2) Informativa - Testimonial de reconocimiento (producida). La codemandada ofreció: 1) Instrumental - Exhibición de documentación (producida). 2) Confesional (producida). 3) Pericial médica (producida). 4) Pericial contable (producida).

El 23 de junio de 2023 alegó de bien probado la parte actora; el 24 de julio de 2023, la demandada Giacosa SRL. La ART codemandada no presentó el suyo.

El 22 de septiembre de 2023 dictaminó la Agente Fiscal sobre los planteos de inconstitucionalidad formulados por la parte actora.

Fueron llamados autos para sentencia, providencia que notificada a las partes y firme dejó la causa en estado de ser resuelta.

### **CONSIDERANDO**

I. De los términos de la demanda y el responde, resultan hechos no controvertidos y, por ende, exentos de prueba:

a) El vínculo laboral habido entre el actor y la razón social Giacosa A Y E Sociedad de Responsabilidad Limitada. Los extremos del contrato relativos a la modalidad contractual por tiempo indeterminado, a la fecha de ingreso del trabajador, el 1° de septiembre de 1993, y de egreso, el 28 de julio de 2017; su desempeño como peón general (categoría de Maestranza C, según CCT 130/75), con tareas de carga y descarga; la remuneración percibida y la jornada completa de labor.

Es dable acotar que la empleadora demandada no dio su versión acerca de las condiciones en que se desenvolvió el vínculo laboral. Esta omisión constituye un incumplimiento de la carga procesal impuesta por el art. 60 del CPL y, por consiguiente, corresponde hacer efectivo el apercibimiento contenido en la norma, bajo el cual fue notificada la demanda, y tener a la accionada por conforme con relación a las características del contrato de trabajo según fueron detalladas por el actor.

b) El contrato de afiliación N° 418413 (con vigencia desde el 1° de diciembre de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2017) suscripto entre las codemandadas, por el cual la empresa Giacosa A Y E SRL estaba cubierta por un seguro comprendido dentro de la normativa de la Ley 24.557.

c) La denuncia de la enfermedad padecida por el demandante,



formulada el 30 de junio de 2016, que Galeno ART S.A. receptó como accidente de trabajo, y el alta médica otorgada el 27 de julio de 2016.

II. En mérito a lo expuesto, corresponde determinar los puntos contradictorios a tratar, esto es, aquellos hechos que requieren un previo análisis de la plataforma fáctica, a los fines de dilucidar la verdad objetiva del caso, conforme al principio de la sana crítica. Asimismo, encuadrar los supuestos probados en las normas aplicables al caso concreto.

Por tanto, las cuestiones controvertidas a dilucidar y de justificación necesaria, conforme al artículo 265, inc. 5, del CPCC, son las siguientes: 1) planteos de inconstitucionalidad formulados por el actor; 2) atribución de responsabilidad a las codemandadas con base en el Derecho Civil. Defensas opuestas por Galeno ART S.A; 3) procedencia o no de los rubros e importes reclamados; 4) costas; intereses; honorarios.

**Primera cuestión:** planteos de inconstitucionalidad formulados por el actor.

1. En su escrito introductorio el actor cuestionó la constitucionalidad de la opción excluyente prevista en el art. 4° de la Ley 26.773.

Al respecto, señaló que la opción con renuncia establecida por la Ley 26.773 traía aparejada la violación de los principios de indemnidad, irrenunciabilidad y progresividad; asimismo, el principio *alterum non laedere*, que no podía ser limitado o condicionado a renunciaciones previas cuando se ha dañado la integridad psicofísica del trabajador.

Añadió que era impugnable toda presunción ficticia de renuncia. Así, la norma que pretendía atribuir renunciabilidad a lo que la misma ley consagró como irrenunciable (art. 11, LRT), no era sino una decidida coacción, tendiente a evitar el ejercicio del derecho a peticionar justicia (art. 18, CN) y obtener un resarcimiento en la medida del daño sufrido (art. 19, CN).

Por otra parte, tachó de inconstitucional a toda norma que implicara la intervención de las Comisiones Médicas previstas en las Leyes 24.557, 26.773 y 27.348, el Dto. 54/17, y todas sus respectivas disposiciones reglamentarias y complementarias. Relativo a ello, alegó que la intervención objetada pretendía la

violación de las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio; como así también conculcaba el derecho de propiedad, de trabajo, de acceso libre e irrestricto a la justicia, al juez natural, todos ellos protegidos por la Constitución Nacional y Provincial.

La demandada, por su parte, no hizo referencia alguna al planteo esgrimido.

A su turno, la ART codemandada solicitó que se rechazara el planteo formulado por el demandante por considerar que se trataba de un ataque genérico, sin correlación alguna con el reclamo efectuado.

Refirió que el art. 46 de la LRT tenía especialmente en cuenta los intereses del trabajador y mantenía incólumes los principios protectorios tocantes a la materia laboral.

Adujo, igualmente, en lo relativo a los arts. 21 y 22, que el procedimiento establecido en la LRT tenía una fundamentación técnica indubitable.

2. Adentrándome al estudio de esta cuestión, y a los efectos de resolver la controversia, cabe señalar que del tenor del planteo formulado en la demanda surge que el demandante pretende un resarcimiento extrasistémico, es decir, por fuera de la Ley de Riesgos del Trabajo.

De allí que el tema a esclarecer, entonces, consiste en analizar la constitucionalidad de aquellas normas de la Ley de Riesgos del Trabajo que vedan al trabajador siniestrado la posibilidad de accionar con sustento en el derecho civil.

Respecto al art. 4° de la Ley 26.773, considero que no resulta aplicable al presente caso, por cuanto no surge de las constancias de la causa que el actor haya percibido las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo o haya iniciado una acción judicial con tal finalidad. En consecuencia, con este juicio aquel no pretende acumular reparaciones con fundamento en diferentes sistemas de responsabilidad. En otras palabras, en las particulares circunstancias del caso no hubo opción que viabilice declarar inconstitucional la norma referida. Por lo tanto, deviene abstracto un pronunciamiento en tal sentido.

Así lo declaro.

Sin embargo, debo poner que de relieve que lo señalado precedentemente no impide que la víctima de un infortunio pueda acceder a la reparación de los daños alegados, con fundamento en el derecho común.

Ello es así ya que el principio de igualdad ante la ley y no discriminación se encuentra constitucionalmente enunciado en el art. 16 de la CN. Dicha norma establece que “todos sus habitantes son iguales ante la ley”, sin hacer distinción.

No es dable soslayar que, en rigor, no existen motivos justificados para excluir al trabajador de una reparación integral de la que gozaría cualquier persona que sufriera el mismo accidente, y que si no fuera por el hecho de ser trabajador no tendría obstáculo alguno en su reclamo.

Entonces, si la atribución de responsabilidad civil puede ser invocada por cualquier persona que sufra un perjuicio patrimonial, no debe serle negada al trabajador, siempre que acredite los extremos de procedencia, pues ello establece una írrita distinción frente a iguales en igualdad de circunstancias. Por el contrario, infringiría, además, el derecho de propiedad y de libre acceso a la justicia (arts. 17, 18 y 19, CN), así como los distintos tratados con rango constitucional (a partir de su incorporación en el art. 75, inc. 22, CN).

Tan es así que la CSJN sobre el art. 39 de la Ley 24.557 en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 26.773, en autos “Llosco Raúl c/IRMI S.A. y otro s/Inconst. Art. 39 LRT” (L. 334. XXXIX. RHE 12/06/2007, Fallos: 330:2696) entendió que “resulta inconstitucional privar a la víctima de un siniestro laboral de recurrir a la vía del derecho civil para obtener una reparación integral”.

3. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad relativo al procedimiento diseñado por la LRT que debe seguir un trabajador siniestrado para obtener una reparación sistémica de un accidente o enfermedad profesional, cabe expresar que si bien el actor ha transitado parte de aquel, acudió luego a la justicia local a los fines de canalizar su reclamo con sustento en las normas del derecho común, por un hecho ocurrido con anterioridad a la vigencia de la Ley 27.348. Por tales circunstancias devine inoficioso el tratamiento y abstracto el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de los arts. 1º, 2º, 3º, 12, 14, 15, 16

y 21 de la Ley 27.348, del Decreto 54/17, y de los arts. 6°, 8° inc. 3°, 21, 22 y 46 de la Ley 24.557, y así lo declaro.

**Segunda cuestión:** atribución de responsabilidad a las codemandadas con base en el Derecho Civil. Defensas opuestas por Galeno ART S.A.

1. Es dable recordar que el actor pretende obtener el pago de las indemnizaciones previstas en el Derecho Civil comprensivas del daño patrimonial y moral.

Es así como persigue la reparación integral de los daños que dijo haber sufrido como consecuencia del siniestro ocurrido mientras prestaba servicios para su empleadora. Dirige la acción directamente en contra de esta última y, en forma solidaria y conjunta, en contra de la ART, por considerarlas civilmente responsables.

En el primer caso, por considerar que existió una relación directa entre la patología adquirida y la modalidad de la actividad desarrollada en el establecimiento de la demandada. Así, el factor de atribución fue la inadecuada mecánica -sistemática y permanente- de desplazamiento de materiales de gran peso.

En el segundo, ya que Galeno ART S.A. había incumplido los deberes de prevención, con incidencia en la salud del demandante, en tanto destinatario de la obligación de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en virtud de lo establecido por disposiciones del nuevo CCCN (arts. 1021, 1710, 1717, 1740 y 1749, entre otros).

El actor fundó la demanda en el vínculo laboral mantenido con la razón social Giacosa A Y E SRL, desde el 1° de septiembre de 1993, en favor de la cual prestó servicios como peón general (bajo la categoría de Maestranza C del CCT 130/75), con tareas de carga y descarga de elementos de gran peso.

Alegó que, a su ingreso bajo las órdenes de la empleadora, había realizado el examen preocupacional que determinó su plena aptitud física y la inexistencia de patologías incapacitantes o degenerativas.

También aludió a la falta de entrega de elementos de seguridad, y a los incumplimientos de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo constatados en las inspecciones realizadas por la Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia de Tucumán.

Entre otros, destacó que el establecimiento no contaba -siquiera- con un botiquín de primeros auxilios; menos aún con un programa de ergonomía integrado para evitar enfermedades musculoesqueléticas (cfr. art. 8°, incs. a y d, Ley 19.587; Res. MTESS 295/03, Anexo I; art. 28, inc. h, Dto. 170/96).

Por fin, y como factor estructural de riesgo, la empresa no cumplía con un sistema de estiba seguro y adecuada circulación.

En virtud de lo anterior, aseveró que durante el transcurso de la relación laboral había sufrido de manera continua diversos traumatismos, ocasionados por el desplazamiento de materiales pesados, que afectaron su columna y motricidad.

Por su parte, las codemandadas se opusieron al progreso de la pretensión por considerar que no concurrían los presupuestos de hecho sustento del reclamo.

2. Así las cosas, es dable referir a la normativa aplicable a la causa, toda vez que se impone como un deber jurisdiccional calificar jurídicamente las situaciones fácticas. Ello consiste en aplicar el derecho que corresponda a la solución del caso, y de considerar las circunstancias y normas vigentes al momento de dictar sentencia.

A lo anterior se suma, en el marco de las facultades conferidas a los magistrados, aplicar el derecho de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional y con prescindencia de la calificación que hayan podido darle los litigantes, en consonancia con el derecho vigente y el bloque de constitucionalidad federal.

Por ende, la resolución que se intenta ha de ser una decisión prudente, razonada y derivada de la legislación.

No caben dudas de que, en el caso, se discute una pretensión indemnizatoria de tipo extrasistémico (esto es, al margen de la LRT) por daños

derivados de un siniestro, que la parte demandante califica de profesional, con fundamento en las normas del Código Civil y Comercial.

El régimen de responsabilidad civil que se estructura en aquella normativa contempla la unificación de las órbitas contractual y extracontractual. De esta manera, procura un tratamiento sistemático y genérico que atienda todas las situaciones en las cuales existe una atribución del daño por el ordenamiento jurídico que impone el deber de resarcirlo.

Dicho procedimiento sistemático considera el establecimiento y cumplimiento de ciertos requisitos para que exista la obligación de resarcir el daño injustamente sufrido por una persona.

En otros términos, para obtener la reparación integral, el actor debe acreditar la concurrencia de todos los elementos de procedencia de este tipo de acción resarcitoria, que hacen viable la responsabilidad civil invocada.

Por otra parte, resulta que la demanda se dirige se dirige -además de la empleadora- en contra de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, por lo que cabe analizar si ésta puede ser condenada por daños sufridos por el trabajador con base en el Derecho Civil.

Dado el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en el caso “Torrillo Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A y otros/Daños y perjuicios”, T. 205. XLIV. RHE 31/03/2009, Fallos: 332:709), queda establecido que una ART puede ser civilmente responsable por los daños sufridos por un trabajador a raíz de una contingencia laboral, siempre que se configuren los presupuestos necesarios para ello, cuya prueba queda a cargo de la víctima.

Ha dicho la CSJN al respecto que: “... tratándose de daños a la persona de un trabajador, derivados de un accidente o enfermedad laboral, no existe razón alguna para poner a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, en el caso que se demuestren los presupuestos exigibles, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado -excluyente o no- entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera a sus deberes legales”.

Asimismo, en el supuesto de condena civil las eventuales obligaciones de las ART no se limitan a las indemnizaciones previstas en el sistema de la LRT, sino que comprenden la reparación integral de los perjuicios sufridos por la víctima (trabajador) en forma solidaria con el empleador.

Por lo tanto, se recepta en forma favorable la cuestión referida a la posibilidad del trabajador de reclamar a la codemandada una indemnización del Derecho Civil en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Así lo declaro.

3. En el caso, para una correcta solución de la controversia, corresponde analizar los elementos aportados por los litigantes.

3.1. Así, en primer término, cabe referir al dictamen del Perito Médico Oficial, Dr. Adrián Cunio, producido en el marco de la pericia médica previa del art. 70 del CPL (1° de marzo de 2021).

El experto expuso que Ramón Fidel Lucena, de 56 años, manifestó que había ingresado a trabajar en favor de la empresa Giacosa en septiembre de 1993; se desempeñaba como empleado de carga y descarga de materiales en turnos de ocho a doce horas, de lunes a viernes, y sábados medio día. Refirió que debía realizar sus tareas en posiciones incómodas, cargando materiales y herramientas pesadas.

Por otra parte, relató que, en 2016, había sufrido un tirón y mucho dolor en la espalda; fue asistido por ART y le diagnosticaron hernias de discos lumbares. Agregó que continuó el tratamiento mediante su obra social. Requirió cirugía para estabilizar la columna (en 2018), a pesar de lo cual, continuaba con dolor. Por fin, el trabajador acotó que se había desvinculado de la empresa por despido en julio de 2018.

El experto realizó el examen físico y analizó los estudios obrantes en autos. Puntualizó que el actor había denunciado un accidente de trabajo por patología de columna vertebral lumbosacra (el 30 de junio de 2016) y limitación funcional de cadera izquierda.

Asimismo, aseveró haber constatado hernia de disco operada con secuela moderada (16%) con limitación funcional en columna vertebral que

producía al actor una incapacidad parcial y permanente del 20,2% (con factores de ponderación). Que, a su criterio, el mecanismo de esas patologías no era coincidente con relación atribuible al trabajo.

El dictamen antes referido fue impugnado por la parte actora (15 de marzo de 2021) con base en la falta de análisis de los estudios complementarios y la omisión del galeno de solicitar el examen preocupacional lo que, a su entender, desvirtuaba lo informado.

La parte demandada contestó el traslado conferido y solicitó su rechazo. Adujo al respecto que la impugnación efectuada no tenía ningún rigor científico y que, por el contrario, contenía argumentos dogmáticos, sin respaldo profesional que controvirtiera lo informado por el Perito Oficial.

Mediante presentación del 25 de marzo de 2021, el Dr. Cunio manifestó que él había solicitado (el 29 de septiembre de 2020) que se pusieran a su disposición los exámenes preocupacionales, periódicos y de egreso.

Indicó que, a pesar de que le fue notificado que los exámenes no habían sido presentados, se le solicitó que elevara el dictamen pericial encomendado, el que realizó en forma metódica y ordenada, con respeto de la semiología médica y estricta responsabilidad.

Por tales motivos, ratificó íntegramente lo dictaminado.

3.2. El demandante ofreció como prueba instrumental el informe elaborado por el Dr. Dante Rizo el 31 de octubre de 2018.

Cabe señalar que el galeno fue citado y reconoció haber suscripto dicho informe, además de los certificados médicos que había extendido en ocasión de la evaluación médica del actor (acta del 21 de marzo de 2022).

Por otra parte, fue interrogado para que dijera si la patología diagnosticada o las intervenciones quirúrgicas de columna, guardaban nexo causal o vinculación directa, o reconocían su etiología en las tareas de esfuerzo físico desarrolladas por el trabajador en su actividad laboral.

Al respecto, el testigo Rizo respondió que ello no le constaba y,



además, la intervención quirúrgica había sido realizada para reparar una patología existente: espondilolistesis de columna.

Según consta en el informe mencionado, el Dr. Rizo consignó -como antecedentes del estado de salud al momento de la consulta- que Ramón Fidel Lucena refería padecer de dolores de columna dorsolumbar, motivo por el cual se le habían realizado estudios con diagnóstico de espondilolistesis severa. Que se le había efectuado un bloqueo y, ante la persistencia de sintomatología, con compromiso motor y sensitivo de miembros inferiores, se recurrió a una artrodesis instrumental para descompresión neurológica.

El médico determinó hipotrofia del cuádriceps en el miembro inferior izquierdo, con fuerza disminuida y compromiso del nervio periférico (motor grado 4 y sensitivo moderado), que arrojaba un 21,58%. En el miembro inferior derecho, constató compromiso nervioso periférico (motor grado 3 y sensitivo leve), del 14,34%.

En columna dorsolumbar, amén de la cicatriz por artrodesis, detectó limitaciones que estimó en un 27%.

Por último, en la cadera izquierda, estable con limitaciones, arrojó un 27%.

Luego del examen, el médico concluyó que "...al Beneficiario, y por las patologías acreditadas y constatadas, se corresponden de acuerdo al Baremo 478/98, de la Ley 24.241, con una incapacidad del 66,44%...".

3.3. A requerimiento de la parte actora, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo remitió las constancias que obran en el expediente SRT 169204/16 iniciado por el trabajador Lucena con motivo de divergencia en el alta médica otorgada por Galeno ART S.A. el 27 de julio de 2017.

Se desprende del acta de audiencia y el dictamen médico (del 10 de agosto de 2016) que el señor Lucena relató que "en horario de trabajo, mientras cargaba perfiles, sintió un fuerte dolor en la región lumbosacra...".

La Comisión Médica concluyó que el 30 de junio de 2016 el actor había sufrido un hecho súbito y violento, aceptado por la ART como accidente de trabajo, que le ocasionó lumbalgia. Fue asistido por la ART y luego dado de alta.

Por otra parte, indicó que el examen físico y los estudios de diagnóstico aportados daban cuenta de la existencia de protrusiones discales posteriores (niveles L1-L2, L2-L3, L3-L4) que improntaban en la pared anterior del saco dural; espondilolistesis de grado 1 de L5 sobre S1, observándose en proyección del istmo de L5 línea hipointensa en forma bilateral, compatible con espondilólisis.

La CM concluyó que las manifestaciones detectadas no guardaban correlato etiopatogénico ni cronológico con el siniestro denunciado; la patología denunciada revestía carácter inculpable y la signo sintomatología que presentaba el damnificado era expresión de ello. Finalmente, no ameritaba continuar con prestaciones por la ART.

El mentado dictamen fue ratificado por la Comisión Médica Central que intervino con motivo de la apelación del trabajador. El organismo dictaminó (en 16 de junio de 2017) que "... no obran ni se aportaron elementos de orden médico suficientes que permitan desvirtuar lo determinado en dictamen recurrido... Que, cabe destacar que la afección reflejada en estudios aportados por el trabajador en audiencia... se interpretan como patología de naturaleza degenerativa y evolución crónica, que no puede vincularse fehacientemente y en forma exclusiva con la realización de esfuerzos, toda vez que se presenta con diferentes grados de severidad en sujetos de ambos sexos independientemente de la actividad laboral desarrollada. Asimismo los cambios degenerativos a nivel de los discos intervertebrales pueden evidenciarse a través de estudios específicos como la resonancia nuclear magnética en individuos asintomáticos...".

3.4. La parte actora ofreció los testimonios de Néstor Rodolfo Rodríguez, Gustavo Ariel Avellaneda y Julio César Córdoba.

3.4.1. Según acta labrada el 11 de marzo de 2022, el testigo Rodríguez declaró que sabía que el actor trabajaba en Giacosa porque él es fletero desde hace más de 20 años y la empresa quedaba en frente; conocía a todos los que trabajaban ahí y era común verlos todos los días cargando las camionetas. Dijo que el actor era uno de los cargadores y realizaban la tarea a mano porque no había puente.

Interrogado para que dijera “si en las tareas que realizaba el actor para su empleador estaba provisto de elementos laboral” (sic), el testigo respondió que no sabía de qué se trataba eso, pero cuando él iba a cargar ahí los fletes los veía con ropa común, la que se usa a diario, y todos estaban iguales.

Requerido por la representación de la parte actora para que aclarara si los trabajadores tenían algún elemento de seguridad, el testigo respondió que si con ello se refería a botines y casco, no tenían ninguno.

A las repreguntas formuladas por la representación de la demandada respondió que él trabaja como fletero de forma independiente y no está inscripto en AFIP, se trata de un trabajo ocasional. Además, dijo que el vehículo (una camioneta modelo '78, dominio WBT848) en el que desarrolla sus tareas es de su propiedad y en la actualidad está prácticamente en desuso.

3.4.2. A continuación, el testigo Avellaneda declaró que el actor trabajaba en Giacosa y lo sabía porque él iba a comprar materiales ahí. Por la misma razón, conocía que Lucena realizaba tareas de carga y descarga de materiales (chapas, hierro, perfiles, etc.).

Interrogado para que dijera “si en las tareas que realizaba el actor para su empleador estaba provisto de elementos laboral” (sic), el testigo respondió que, como es un lugar abierto, todo está a la vista; cuando hace calor los muchachos (sic) que trabajan ahí andan de pantalón corto.

Acerca de cuáles eran las condiciones de orden y seguridad laboral existentes en el establecimiento donde prestaba servicios el actor dijo que estaba a la vista de todos: había hierros por todos lados, en el piso; había estantes con chapas y lugares donde había chapas tiradas; en el lugar donde se cortaban los materiales, chapas y hierros, siempre quedaban algunos pedazos tirados.

Requerido por la representación de la parte actora para que aclarara si los trabajadores tenían algún elemento de seguridad, el testigo respondió que no.

A las repreguntas formuladas por la representación de la demandada respondió que él trabajaba como albañil en forma particular y no

estaba registrado; acotó que realizaba trabajos chicos y no obras (como ser la construcción de edificios).

Por otra parte, dijo que nunca había pedido la factura de las compras realizadas y que, si se las habían dado, no las guardó, porque él no tenía que rendir cuentas a nadie.

Por último, dijo que compartía con los empleados de la empresa Giacosa eventualmente, cuando iba a pedir presupuestos o a hacer compras, ya que el trabajo de albañil no es constante. La frecuencia con que iba era relativa.

3.4.3. Finalmente, el testigo Córdoba declaró que sabía que el actor trabajaba en Giacosa porque él es chapista y compra materiales en ese lugar. Dijo que, dado que él iba a hacer compras de materiales ahí, conocía que el señor Lucena era quien hacía las cargas y descargas en el lugar.

Interrogado para que dijera “si en las tareas que realizaba el actor para su empleador estaba provisto de elementos laboral” (sic), el testigo respondió: “de ninguna, creo. Lo sé porque al ir yo al comprar los materiales veía a él y a los compañeros descargar los materiales y alcanzarlos, inclusive al mío”.

En lo relativo a las condiciones de orden y seguridad laboral existentes en el establecimiento donde prestaba servicios el actor dijo: “en el momento que yo compraba, en el primer depósito, porque tienen otro depósito actualmente en frente, ninguna. Actualmente, en el frente, donde están actualmente, tampoco cuentan con ropa, nada. Sí noté que tienen un puente de carga, creo que le llaman, pero que no veo que lo utilicen”.

A solicitud de la parte actora aclaró que el señor Lucena trabajaba (ya no lo hace en la actualidad) en Giacosa y, en cuanto a las condiciones, utilizaban ropa normal que llevaban de su casa, en zapatillas, y sin cascos; en varias ocasiones vio que uno de los empleados andaba en short (sic). Ninguno de los trabajadores tenía elementos de seguridad, como cascos o botines, ni fajas (por el peso que levantaban).

A las repreguntas realizadas por la parte demandada respondió que él vive casa de por medio con la del actor. Asimismo, dijo que su taller de chapa está ubicado en su domicilio y no cuenta con habilitaciones ni está registrado en AFIP; acotó que, desde su accidente, está cerrado.

Por fin, respondió que no contaba con las facturas de los materiales que compraba en Giacosa para su taller; había tenido un accidente y se había mudado a Trancas. Añadió que él trabajaba solamente con su hijo, no tenía empleados.

3.4.4. Consta que, mediante presentación del 14 de marzo de 2022, la parte demandada formuló tachas de los testigos Rodríguez, Avellaneda y Córdoba.

Al respecto, sostuvo que era evidente la relación de familiaridad, amistad o trato frecuente entre el actor y los deponentes, ya que ninguno de éstos había sido notificado mediante oficio dirigido a la policía -a los efectos de comparecer a prestar declaración-, sino que habían sido contactados directamente por aquél.

Adujo también que era notorio que la relación entre los testigos y el actor había trascendido el ámbito laboral, lo que se desprendía del hecho de que, cinco años después de la desvinculación de Lucena, seguían en contacto permanente.

Refirió que la falsedad en los dichos de los testigos se evidenciaba en la imposibilidad de verificar la actividad que realizaban y que los había llevado a tomar conocimiento de los hechos relatados.

La parte actora no contestó el traslado corrido.

En este estado, considero que las tachas formuladas por la parte demandada deben desestimarse, en atención a que los fundamentos brindados no revisten suficiencia para desacreditar los testimonios. Ello es así puesto que la tacha del testigo no puede fundarse en la mera invocación de falsedad, complacencia o contradicción.

Sin perjuicio de lo anterior, la utilidad de las declaraciones queda reservada exclusivamente a la apreciación del sentenciante, en el contexto probatorio general. En consecuencia, las tachas formuladas por la parte demandada se rechazan. Así lo declaro.

3.5. La Secretaría de Estado de Trabajo se expidió sobre la autenticidad de las copias de actas labradas por el servicio de inspección y

vigilancia a la firma Giacosa A Y E SRL, que forman parte del expediente principal 7737/181-DI-2017 (y agregados 7994/181-DI-2017; 8129/181-GL-2017; 8795/181-I-2017 y 8144/484-G-2017).

Sin perjuicio de ello, no aportan datos que contribuyan a la resolución del conflicto.

3.6. De la absolución de posiciones de Eugenio Giacosa (acta del 30 de marzo de 2022), en su carácter de Socio Gerente de Giacosa A Y E SRL, se desprende que reconoció como cierto que Ramón Fidel Lucena realizaba tareas de carga y descarga de hierro y otros elementos que comercializa en su empresa, pero no de cemento porque nunca vendieron ese producto (pos. 2). Asimismo, dijo que era verdad que esas tareas requerían esfuerzo físico (pos. 3) y agregó que había seis empleados, y las cargas se realizaban de a dos.

Dijo que era cierto que las tareas que realizaba Lucena requerían botines, fajas, casco y guantes (pos. 5) y agregó: “pero guantes no pueden manejar chapas, se los proveía, pero no lo usaban. No, porque la chapa corre y les corta la mano. Sí se les proveía”. Negó que Lucena hubiera trabajado desprovisto de elementos de protección (pos. 6) y agregó que en todas las inspecciones estaban firmadas las hojas que él prestaba conformidad que los recibía (sic).

Por otra parte, negó que Ramón Fidel Lucena careciera de elementos de protección para realizar sus tareas (pos. 4). Agregó que en ninguna de las inspecciones -de la ART, de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y del Ministerio de la Nación- les habían puesto objeciones sobre los elementos ni con lo relacionado a la seguridad e higiene en el trabajo. Aclaró que sí le habían objetado acerca de algunos temas irrelevantes (cuáles eran los caminos por los que podía transitar el personal de compras; cambio de lugar de los matafuegos), pero nada relativo a la seguridad e higiene en el trabajo.

Por último, cabe destacar que a la posición 10 (“Jure cómo es verdad que Lucena sufrió un accidente durante la jornada laboral mientras desplazaba perfiles de hierro”), respondió que no era verdadero ya que, de haber sido así, se lo habría derivado a la ART, como siempre. Aseveró que la ART

nunca determinó una incapacidad ni cambio de tareas; le daban el alta sin problemas a los pocos días.

A solicitud de la representación de la parte actora, para que aclarara la respuesta anterior -en la que dice que no tuvo un accidente, pero, al mismo tiempo, dice que la ART le dio de alta varias veces-, explicó: “No, no, si tenía un accidente. Accidente no tuvo en realidad. Si tenía un problema, no venía a trabajar, no se presentaba. Y ahí se lo derivaba a la ART porque no había presentación al trabajo. No tuvo ningún accidente de trabajo porque yo me acordaría y no me acuerdo. En todos los casos él no venía a trabajar y de ahí se lo mandaba a que lo vean en la ART si tenía un problema. Un empleado con muchas faltas, también; faltaba permanentemente”.

3.7. En cuanto a la prueba instrumental ofrecida por la parte demandada resulta que el actor Lucena fue citado a reconocer o desconocer aquellos documentos que se le atribuyeron.

De acuerdo con el acta de audiencia (llevada a cabo el 10 de mayo de 2022), el trabajador reconoció haber suscripto de su puño y letra los instrumentos exhibidos, a excepción de las constancias de alta médica fechadas en 31 de mayo de 2011 y 16 de junio de 2011, así como de las constancias de entrega de ropa de trabajo (en enero y julio de 2017).

Sin perjuicio de lo anterior, según el dictamen pericial elaborado por el Perito Calígrafo José Luis Rodríguez (8 de agosto de 2022), las firmas insertas en los documentos desconocidos pertenecían a la mano caligráfica del actor.

La constancia de alta médica de CNA ART, fechada en 17 de noviembre de 2010, correspondiente al siniestro N° 541927 ocurrido el 9 de noviembre de 2010, según el cual el trabajador sufrió un fuerte dolor en la espalda, en horas de trabajo, mientras cargaba hierros. El diagnóstico consigna: “paciente que presenta buena evolución de su cuadro agudo, continúa su tratamiento por su obra social por pinzamiento L5 S1 espondilo listesis artrosis”.

El alta médica del 31 de mayo de 2011 se corresponde con el siniestro N° 554583 ocurrido el 11 de mayo de 2011, según el cual el señor Lucena sintió un tirón en la cintura al levantar unos hierros. El diagnóstico consigna “lumbalgia post esfuerzo”.

Por último, el alta médica del 16 de junio de 2011 se corresponde con la historia clínica N° 134223 por el siniestro ocurrido el 4 de junio de 2011, según el cual el demandante sufre de dolor y tumoración en hombro derecho luego de haber levantado hierro.

El alta médica de QBE ART, del 24 de noviembre de 2011 refiere al siniestro N° 832326 ocurrido el 8 de noviembre de 2011, cuando el actor sintió dolor en el hombro derecho en oportunidad de colocar unos perfiles de zinc.

Por otro lado, la demandada acompañó una constancia de visita y relevamiento de contaminantes, realizadas por CNA ART (en enero de 2005). Como dato de interés, cabe destacar la detección de falta de capacitación y primeros auxilios (normas y procedimientos en general), como también la determinación como contaminante de “posiciones forzadas y gestos repetitivos extremidad sup.” (sic) en el sector de depósito y puesto de maestranza, en el que figura comprendido Ramón Fidel Lucena.

Adjuntó también una constancia de capacitación sobre incendios, realizada el 1° de agosto de 2017, por el Técnico en higiene y seguridad laboral Pablo Andrés Goyeneche quien, además, reconoció la firma inserta como de su puño y letra (acta testimonial-reconocimiento del 18 de marzo de 2022).

Por último, cabe mencionar las actuaciones administrativas originadas en el Actas Digitales Únicas N° 16009 del 20 de agosto de 2015 contenida en el expediente 4297/181-HS-2015 remitido por la Secretaría de Estado de Trabajo (el 8 de marzo de 2022).

De acuerdo con lo consignado en dichas actuaciones, había sido constatado el incumplimiento de la empresa con relación a la entrega de elementos de protección personal (EPP), a la colocación de cartelera de seguridad, barandas (en entrepiso y escalera) y luces de emergencia.

Según descargo realizado por la firma Giacosa A Y E SRL (el 3 de septiembre de 2015) y consta en el Acta Digital Única N° 91095 del 31 de mayo de 2016, tales incumplimientos habían sido subsanados.

3.8. La codemandada ofreció prueba pericial médica. El Perito Médico Dr. Juan Carlos Perseguino presentó el pertinente dictamen el 29 de



mayo de 2022.

3.8.1. El experto detalló los antecedentes médico legales y formuló consideraciones relativas a la omisión de exámenes preocupacionales y periódicos, como así también del informe de las condiciones y medio ambiente del trabajo (CYMAT).

Observó que los organismos administrativos no tomaron en consideración que el actor, durante los 23 años que duró el vínculo laboral, había realizado trabajos con gran esfuerzo de toda la columna lumbar. Ello, agregó, representaba un hecho importante para determinar el nexo de causalidad entre la patología denunciada y la labor desempeñada.

También destacó el estudio de RMN realizado por la ART al demandante, que arrojaba la existencia de protrusiones discales en distintos segmentos columnarios. Acotó que las protrusiones y hernias de discos vertebrales estaban contempladas como enfermedades profesionales vinculadas a tareas que requerían de movimientos repetitivos y/o posiciones forzadas de la columna vertebral.

En cuanto a la espondilolistesis ístmica, refirió que se trataba de un deslizamiento hacia adelante de un cuerpo vertebral, por encima del que está debajo, debido a una pequeña fractura de una pieza del hueso que conecta las dos articulaciones en el lado posterior del segmento vertebral.

Explicó que el factor mecánico era evidente y la reiteración de microtraumatismos en hiperextensión aumentaba su frecuencia de manera considerable.

De allí que estimara que era perfectamente compatible con la actividad laboral desarrollada por Lucena, sin que existiera la posibilidad de descartar ese origen traumático.

Acerca de la espondilosis, precisó que se trataba de una fractura de una parte de la vértebra (istmo o porción interarticular) que podía ocurrir debido al estrés por uso repetitivo y afectar uno o ambos lados del hueso. Es así como el hecho de que el paciente presentara espondilólisis bilateral explicaba el cuadro de espondilolistesis, que requirió tratamiento quirúrgico, dado el intenso dolor que

padecía el trabajador.

Para finalizar, afirmó: “relacionando las tres patologías informadas en la RMN cabe concluir que las mismas son indudablemente el resultado del estrés al que fue sometida la columna vertebral del actor, durante los 23 años de trabajos forzados con esfuerzos repetitivos que exigieron de manera desmesurada dicha estructura”.

En virtud de lo expuesto, indicó que el actor presentaba al momento del examen una incapacidad parcial y permanente del 40% por espondilolistesis traumática operada con secuelas electromiográficas (basado en el Baremo Dto. 659/96).

A los puntos de pericia propuestos respondió que en la demanda se reclamaba por una patología de columna dorsolumbar y que, actualmente, el trabajador padecía de una limitación funcional en esa región, con alteración de la marcha, y cuadros de lumbalgias y lumbociatalgias. Asimismo, que la alteración referida implicaba que el señor Lucena debiera utilizar un bastón como apoyo.

Por otra parte, puntualizó que los exámenes a los que había recurrido para la realización del informe eran aquellos que oportunamente fueron adjuntados por el paciente a los fines de la realización de la pericia médica oficial. Ello, con excepción de una electromiografía de miembros inferiores, cuyos resultados no diferían de las de períodos anteriores.

Destacó que las lesiones que presentaba el actor no correspondían a una afección inculpable y profundizó: “es mi criterio que el proceso patológico en la columna vertebral que se venía desarrollando, por la esforzada actividad laboral que desempeñaba el actor y la falta de provisión de los elementos protectores correspondientes, no fue advertido oportunamente al no realizar los exámenes periódicos determinados por ley, todo lo cual impidió la toma de los recaudos necesarios para evitar la progresión de la misma. En un determinado momento, por un esfuerzo físico forzado, se puso de manifiesto la patología de la columna, configurando un cuadro de lumbalgia y lumbociatalgia que determinó la correspondiente denuncia ante la ART solicitando las correspondientes prestaciones y el reconocimiento del infortunio”.

Acerca de la magnitud de las lesiones refirió que la afección en la columna lumbar impedía al trabajador realizar las tareas laborales que desarrollaba, como cualquier otra que exigiera movimientos forzados y repetitivos de dicha región.

Finalmente, explicó que, al realizar la denuncia ante la ART por dolor intenso durante un esfuerzo, la lesión revistió el carácter de aguda y, a partir de entonces, la persistencia del dolor y la limitación funcional adquirieron el carácter de crónicas.

3.8.2. La parte codemandada impugnó la pericia (presentación del 8 de junio de 2022) por considerar que no correspondía la valoración de incapacidad realizada por el perito en virtud de estar reconocido que la patología de columna del actor era degenerativa y no causada por el trabajo.

Al respecto, adujo que la descripción del experto y lo informado en los estudios de columna lumbar demostraban el origen congénito de la espondilolistesis L5-S1, que correspondía a una enfermedad degenerativa, constitucionalmente determinada y lentamente evolutiva, en la que se producía inicialmente un proceso de deshidratación no agudo del núcleo pulposo del disco intervertebral.

A su vez, la demandada cuestionó (escrito del 9 de junio de 2022) que el perito se arrogara la atribución de formular apreciaciones subjetivas y jurídicas que no estaban relacionadas con su función en el proceso.

Aseveró que el galeno, con el objeto de infundir compasión en el juzgador, había mencionado en varias oportunidades que el actor realizaba trabajos forzados -lo que remontaba a la esclavitud- con la intención de querer reflejar que la empleadora había hecho trabajar al señor Lucena en condiciones de vida y trabajo contrarias a la dignidad humana.

Adujo que lo expuesto revelaba un alto grado de compromiso del Perito con los intereses del actor, lo que le restaba validez técnica a su informe.

Contrastó las conclusiones impugnadas con la documentación incorporada, el testimonio del Dr. Rizo y la pericia médica del Dr. Cunio, y destacó que en todos los casos había sido determinado que las dolencias del actor -

patologías columnarias, cuya existencia estaba fuera de discusión- como inculpables, degenerativas o de origen congénito.

Por último, la parte actora (presentaciones del 14, 15 y 16 de junio de 2022) contestó los traslados conferidos y puso de relieve la importancia de los exámenes preocupacionales, máxime si la demandada pretendía establecer la preexistencia de una patología del trabajador a su ingreso (sobre todo, al tratarse de tareas que requerían esfuerzo físico sostenido, de carga y descarga).

3.8.3. El Dr. Perseguino replicó los dichos vertidos por la demandada y la codemandada. Al respecto, señaló que esta última sólo había esgrimido simples comentarios, sin haber aportado pruebas que avalaran sus expresiones.

Destacó que, contrariamente a lo afirmado por Galeno ART S.A., el hecho de que el actor hubiera desarrollado una actividad laboral forzada durante 23 años, sin haber sido sometido a un examen periódico y sin contar con elementos de trabajo adecuados, permitió el avance de la patología columnaria que debió haber sido detectada en el momento oportuno. De esta manera, añadió, podrían haberse tomado medidas preventivas a fin de evitar el agravamiento de la enfermedad.

A todo evento, sostuvo que el trabajo resultó ser un factor coadyuvante para la producción y aceleramiento de las dolencias del demandante.

Sobre las apreciaciones efectuadas por la demandada, acotó que lo expresado en el dictamen no tenía el significado que aquélla le había atribuido; en particular, con relación a la “errónea interpretación” del Dr. Cunio, en lo relativo a los “trabajos forzados” o a lo “traumático” del evento (por cuanto no era estrictamente asimilable a “violento”).

3.9. Por último, a requerimiento de la codemandada fueron remitidos los recibos de sueldo de Lucena correspondientes al período 06/2016 a 07/2017, inclusive.

Luego, de la absolución de posiciones resultó que el actor negó que se encontrara en óptimo estado de salud (acta del 5 de abril de 2022).

Finalmente, de la pericia contable elaborada por la Perito Contadora Marcela Paola López (20 de abril de 2022) no se desprenden datos útiles a los fines de resolver la controversia.

4. Expuestas las pruebas de relevancia que se han producido, cabe preguntarse si ha resultado acreditado que el trabajo revistió la condición de causa adecuada de los daños a la salud cuya reparación reclama el actor. En otros términos, si probó el nexo de causalidad entre las tareas (es decir, el trabajo) y las dolencias padecidas; y, en ese supuesto, si procede la reparación intentada.

En el caso particular, no fue materia de controversia que el señor Ramón Fidel Lucena se desempeñó como peón de cargas, bajo dependencia de la razón social Giacosa A Y E SRL. Tampoco que sufrió un hecho violento y traumático, accidente de trabajo en los términos de la Ley 24.557, denunciado el 30 de junio de 2016 y que así fue reconocido por la Comisión Médica jurisdiccional.

Sin perjuicio de ello, fue puesto en tela de juicio el origen laboral de las dolencias físicas detectadas y las secuelas incapacitantes derivadas del accidente sufrido.

Así, como consecuencia de aquel evento, el trabajador recibió prestaciones médico-asistenciales de la ART demandada, con alta médica el 27 de julio de 2016, sin incapacidad y con la indicación de que la patología de base era de carácter inculpable.

A su turno, la autoridad administrativa consideró que la afección padecida por el actor no guardaba relación con las tareas desempeñadas por el demandante.

De acuerdo con el dictamen pericial médico del 1° de marzo de 2021, el Dr. Cunio aseguró la existencia de hernia de disco operada y de limitación funcional de cadera. Sin embargo, el diagnóstico no sólo difiere del invocado por el actor, sino que no obran registros de ningún tipo que den cuenta de ello.

Por el contrario, las constancias de autos y, en particular, el dictamen del Perito Perseguino, refieren a la realización de una artrodesis para descompresión del compromiso nervioso por espondilolistesis de columna severa (en lisis L5S1).

En este último informe, el galeno determinó la relación de causalidad entre la enfermedad y la actividad del actor (de carga y descarga), que se presentó como inequívoca; relación causal que constituye el presupuesto indispensable de la responsabilidad que se intenta y que recae sobre las codemandadas.

En otros términos, la pericia da cuenta que la etiología de la patología sufrida por el demandante surge de las tareas desarrolladas por éste, a lo largo de un vínculo laboral de más de 20 años.

Se trata de una prueba de orden clínico patológico que permite establecer una asociación de causa-efecto entre las lesiones sufridas por el trabajador -producidas como consecuencia del evento traumático- y la limitación funcional incapacitante, parcial permanente y definitiva, del 40% de la total obrera, de acuerdo con el dictamen del Dr. Perseguino.

No soslayo las impugnaciones efectuadas por los litigantes, tanto a la pericia del Dr. Cunio por la parte actora, como al dictamen del Dr. Perseguino, por las codemandadas, según los argumentos vertidos y que fueron expuestos anteriormente.

Para determinar si el trabajo revistió la condición de causa adecuada de los daños a la salud cuya reparación reclama el actor, o si se trata de una enfermedad inculpable (como afirmaron las codemandadas), sin dudas, resulta definitorio el informe pericial.

Porque, si bien es cierto que el dictamen pericial no vincula al juez, cuando aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no se dan razones valederas que demuestren fehacientemente que el auxiliar de la justicia incurrió en un error o ha hecho un inadecuado uso de sus conocimientos científicos, se debe estar a sus conclusiones, pues no es admisible apartarse de ellos en forma antojadiza y arbitraria.

La prueba pericial tiene por objeto auxiliar al juez en la apreciación de los hechos controvertidos a través de la opinión o dictamen de quienes tienen conocimientos especiales. En otros términos, la función del perito no es otra que apreciar los hechos con su ciencia o técnica y solo cuando ello sea necesario para la solución de la controversia su informe será computable.

Bajo estas afirmaciones, el Máximo Tribunal Nacional al referirse a la prueba pericial revalidó el criterio que venía sustentando, y al hacerlo, sostuvo: "... si bien en nuestro sistema la prueba pericial no reviste el carácter de prueba legal, puesto que el experto es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los que aquél haya llegado, en tanto no adolezcan de errores manifiestos, o no resulten contrariados por otra probanza de igual o parejo tenor. En tales condiciones, 'no parece coherente con la naturaleza del discurso judicial apartarse [del consejo experto] sin motivo y, menos aún, abstenerse de ese aporte'" (Fallos: 331:2109)" (CSJN, Unión de Usuarios y Consumidores c. EN -MO V. E. Inf. - Sec. Transporte - dto. 104/01 y otros s/ amp. proc. sumarísimo (art. 321, inc. 2°, CPCC) - 24/06/2014, Cita online: AR/JUR/27340/2014).

Estos principios son absolutamente aplicables al presente asunto, pues para establecer si las dolencias invocadas por el actor tienen su causa eficiente en el siniestro sufrido (e incluso su grado de incapacidad) era imprescindible la pericia médica, ya que se trata de un tema que excede el marco normal de conocimiento propio de la función jurisdiccional.

En mérito a lo expuesto, considero que las observaciones formuladas por la parte accionada al dictamen pericial del Dr. Perseguino se fundan en meras discrepancias, sin sustento científico o técnico, que no logran desvirtuar las conclusiones a que arribara el galeno ni configuran una crítica concreta al trabajo pericial practicado.

Lo dicho precedentemente anima la convicción de que medió correlación entre el hecho sufrido (agudo dolor en la zona lumbar al levantar unos hierros) y la pretensión de lesión incapacitante referida como secuela. En este sentido la pericia médica del Perito Perseguino resulta determinante, sobre todo

teniendo en cuenta los factores y agentes de riesgos a lo que estuvo expuesto el trabajador durante toda la relación laboral.

Por tanto, estimo probado el daño derivado del infortunio laboral sufrido por el actor.

De otra parte, no fue comprobado que el origen de las lesiones fuera otro, ya que no obra en la causa constancia alguna que refiriera a una patología idiopática de base con poder de interrumpir la vinculación causal.

5. Por otra parte, cabe referir a las concretas condiciones de labor en que se produjo el infortunio, es decir, corresponde el examen relativo a la forma o modalidad de trabajo del dependiente y, en ese marco, si esas condiciones eran seguras o no.

A la hora de evaluar las secuelas incapacitantes, es dable recordar que no era la primera vez que el trabajador acusaba dolencias físicas ocasionadas por el trabajo realizado en favor de Giacosa A Y E SRL.

Tal lo que fue reconocido por la demandada en su responde y surge también de las constancias de alta médica que le fueron extendidas al actor con motivo de la intervención de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo que precedieron a la codemandada.

Con más razón, era obligación de la empresa accionada hacer entrega de los elementos de seguridad adecuados.

Al absolver posiciones, el Socio Gerente de Giacosa A Y E SRL reconoció que dichos elementos (tales como, fajas, botines, etc.) eran necesarios para la realización de la tarea como la que desempeñaba Lucena. Afirmó también que aquéllos eran proporcionados al personal (inclusive los guantes de descarte, aunque no los usaran).

Empero, lo cierto es que tales manifestaciones no encuentran correlato en las restantes pruebas.

No obsta a lo anterior que el trabajador hubiera suscripto dos “constancias de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal”, en los períodos enero y julio de 2017.



Ello es así, ya que considero que, a todo evento, tales instrumentos sólo constatan el hecho de esa entrega aislada (no hay constancias de que se hubiera cumplido con esa obligación en forma periódica a lo largo de la relación laboral) y con posterioridad a la detección de la patología columnaria del empleado.

Los testigos que depusieron a instancias de la parte actora destacaron que los empleados de la empresa no contaban con elementos de seguridad para realizar el trabajo de carga y descarga (de materiales, como ser chapas y hierros), tareas que eran llevadas a cabo en forma manual. Tampoco había un sistema de asistencia mecánica (y si había, no se usaba).

Conforme los hechos acreditados en la causa, el trabajador estuvo inmerso en un ambiente laboral que resultó nocivo para su salud, lo que fue corroborado por las declaraciones testimoniales y la opinión del experto en la pericia médica. La patología se desencadenó y se acentuó por la permanencia en el tiempo provocando la incapacidad.

En virtud de lo expuesto precedentemente es que considero que los factores laborales actuaron y contribuyeron al desencadenamiento de las lesiones que actualmente padece el actor.

La conducta de la empleadora demandada fue colocar al actor en condiciones de trabajo sumamente precarias, sin el suministro de elementos de seguridad adecuados para el cumplimiento de las labores ni el otorgamiento de las pertinentes capacitaciones.

El trabajo del accionante, de manipular objetos pesados, de manera repetitiva, y sin cuidado ergonómico alguno, ocasionó las lesiones que actualmente sufre en la porción dorsolumbar de la columna vertebral. De allí la necesidad de otorgar elementos de protección y auxilios mecánicos, y cursos de capacitación para optimizar la postura para manipular los objetos pesados, y evitar estar en posiciones anti-ergonómicas.

En un esquema como este, el vicio o riesgo de la cosa se expande y alcanza la labor en sí misma, junto con todos los elementos y circunstancias que participan de ella. El trabajo, entonces, queda enmarcado en el art. 1757, Código

Civil y Comercial de la Nación, como actividad riesgosa.

Aun así, la falta de medidas de seguridad no se refería únicamente a la falta de entrega de equipos y elementos de protección adecuados para los trabajos que realizaba el actor, ni dictado cursos de capacitación. Los controles deben constar en actas circunstanciadas que permitan establecer el exacto cumplimiento de las medidas de seguridad, lo que en el caso considero que no ha ocurrido.

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 1757 y 1758, CCCN, Giacosa A Y E SRL resulta responsable por la reparación de las consecuencias dañosas padecidas por el demandante.

Cabe acotar que la demandada no acreditó tampoco haber adoptado medidas tendientes a evitar movimientos forzados y bruscos durante el desempeño del accionante. Es decir, no cumplió con la obligación que le imponía el art. 75, LCT, y tal apartamiento de la norma también guarda relación de causalidad adecuada con el infortunio del actor.

En consecuencia, la empleadora debe responder por el daño ocasionado a la integridad física del trabajador. Es decir, que cabe hacer lugar a la pretensión de reparación por las consecuencias dañosas que sufre el demandante, con fundamento en el derecho común. Así lo declaro.

6. En cuanto a la responsabilidad atribuida a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo Galeno ART S.A., juzgo que corresponde condenarla de manera solidaria con la demandada Giacosa A Y E SRL.

Sobre esto, considero que en un tipo de trabajo, con una actividad como la acreditada, se habilita especial y particularmente la responsabilidad de la ART en el marco de los arts. 1710, inc. b), y 1716 del CCCN, por los referidos incumplimientos de seguridad e higiene.

Galeno ART S.A. debía analizar el puesto de trabajo, cada etapa de la tarea, riesgos, movimientos excesivos o falsos y capacitar al personal en el movimiento manual de materiales. En otras palabras, cumplir con su deber de prevención, cosa que no hizo.

Así, cabe la condena solidaria de la ART y la empleadora del actor que padeció de secuelas incapacitantes, en la medida en que los elementos probatorios señalados en los párrafos anteriores permiten tener por configurado el incumplimiento de la codemandada, que no ha sido desvirtuado con ninguna prueba de diligencia en contrario.

Máxime cuando pesaba sobre ella probar el correcto cumplimiento a las obligaciones legales a su cargo -prevención de accidentes laborales- y ninguna prueba produjo en tal sentido.

En otras palabras, la aseguradora codemandada no acreditó que hubiera desplegado medidas preventivas en el establecimiento donde se desempeñaba Lucena, por lo que omitió el cumplimiento de sus deberes de seguridad y vigilancia de acuerdo con lo previsto en el art. 4°, ap. 1, LRT.

Tan es así que, si la aseguradora hubiera dado cabal cumplimiento a sus obligaciones formales de inspección, control y denuncia, y hubiera cumplido con su deber personal de dar capacitación a los dependientes de la empleadora asegurada, la configuración y entidad del daño podría haberse evitado.

Si bien no es jurídicamente viable responsabilizar a las ART al margen de los términos de la póliza contratada en el marco de la LRT, en el caso, la aseguradora incurrió en omisiones e incumplimientos a sus obligaciones legales que, por sus características y por su gravedad, aparecen concurrentes en el proceso de causación del daño pues, razonablemente apreciadas, guardan adecuada y lógica relación causal con la incapacidad que padece el accionante.

En efecto, no caben dudas de que las secuelas incapacitantes sufridas por Lucena eran previsibles y prevenibles técnicamente, de modo que estaba a cargo de la ART la correspondiente observación a la empresa sobre dichas circunstancias de riesgo.

En el caso, la aseguradora no especificó concretamente acerca de cuáles fueron las diligencias realizadas, ni probó los actos orientados a la prevención de los riesgos laborales propios de la actividad que realizaba el actor, a pesar de que el ordenamiento jurídico le imponía un obrar positivo (art. 4°, Ley 24.557, arts. 5° y 7°, Ley 19.587. Dto. 351/1979).

En síntesis, su omisión no puede ser catalogada como ajena al daño si los actos omitidos, impuestos *expressi verbis* por el ordenamiento jurídico, eran aptos para excluir el peligro y detener el curso de los acontecimientos que desembocaron en el perjuicio.

Tengo en consideración aquí que ya había mediado indiferencia por parte de Galeno ART S.A. al desconocer la dolencia del demandante por considerar que no encuadraba en el art. 6° de la LRT, a pesar de que la Comisión Médica dictaminó que se había tratado de un acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Ello agravia el art. 19 de la Constitución Nacional que recepta el principio *alterum non laedere*.

Por otra parte, para meritar la responsabilidad que le cabe a la ART no puede soslayarse la clara prescripción del art. 4° de la LRT. Desde lo dispuesto en el apartado 1°, relativo a su obligación de adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo y de asumir compromisos concretos de cumplir con las normas de higiene y seguridad. Como también los específicos deberes reglados en el apartado 2° y sus derivaciones consecuentes, tales como establecer un plan de acción que contemple la evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución; visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos; definir medidas correctivas que deberán ejecutar las empresas para reducir los riesgos identificados y la siniestralidad registrada; propuestas de capacitación para el empleador y los trabajadores en materia de prevención. Asimismo, lo consagrado en el art. 31, punto 1, apartados a) hasta g).

En el caso bajo análisis, estimo incumplidas esas obligaciones. Ello, en virtud de que, demostradas las condiciones en que trabajó el actor -mediante las pruebas destacadas y, en particular, la testimonial- la responsabilidad de la ART resulta ineludible al no haber demostrado con pruebas concretas haber dado un adecuado cumplimiento a los deberes de prevención a su cargo.

Y en tanto no acreditó que constatará los riesgos; que pusiera en conocimiento de patronal; que capacitara o informara respecto de las condiciones de seguridad e higiene en el establecimiento donde trabajaba Lucena o que intimara la modificación de conductas; como tampoco acercó evidencias de haber

inspeccionado las instalaciones o constatado las condiciones en que se desarrollaban las tareas, dichas omisiones guardan relación causal con el evento dañoso.

Por fin, no puede desconocerse la especialización de la co-accionada en materia de conocimiento de las normas de higiene y seguridad, lo que implica un obrero activo a fin de evitar, eficientemente, los riesgos del trabajo (cfr. Schick, Horacio, “Responsabilidad Civil de las ART en virtud del art. 1074” en Riesgos del Trabajo, Temas Fundamentales, 3 ed. Buenos Aires, David Grinberg Libros Jurídicos, 2010, p. 310).

Analizados en su totalidad los elementos de prueba incorporados, surge con claridad el hecho (trabajo de carga y descarga en condiciones desfavorables para la salud), el daño (patología de columna dorsolumbar diagnosticada que le generó una incapacidad del 40% de la total obrera) y el nexo causal entre uno y otro.

Lo dicho me permite sostener que, en la especie, no se han configurado los eximentes de responsabilidad de la ART.

Y bien, sentadas las premisas precedentemente expuestas, concluyo que el actor ha probado los presupuestos necesarios para la procedencia de la responsabilidad civil.

De allí que corresponda hacer lugar a la acción entablada en contra de la aseguradora con fundamento en el art. 1749, CCCN, y condenar solidariamente a Galeno ART S.A.

7. Por último, es dable resaltar que el CCCN consagra una antijuridicidad objetiva y material. El art. 1717 del código de fondo dispone que “cualquier acción u omisión no justificada que causa un daño será antijurídica”. Para que se configure este presupuesto basta con que se viole el deber general de no dañar a otro.

El infortunio laboral del actor no fue producto de un acto imprudente puntual de la empleadora y la ART, sino de una conducta indeseable permanente y continuada de flagrante incumplimiento al deber esencial de prevenir eficazmente los riesgos del trabajo a lo largo de toda su relación laboral.

Entonces, la responsabilidad es de tipo objetiva (arts. 1757 y 1758, segundo párrafo del CCCN), por lo que correspondía a las accionadas acreditar un eximente de responsabilidad (hecho del damnificado -art. 1729- o de un tercero por el cual no se debe responder -art. 1731-; caso fortuito o fuerza mayor -art. 1730-) o la concurrencia de un supuesto de justificación (art. 1718), lo que no fue invocado ni acreditado.

Si bien las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo son esencialmente aseguradoras, fue intención del legislador que dentro de sus competencias y obligaciones se encontrase la de prevenir los daños generados a las personas con motivo o en ocasión del trabajo y, en caso de fallar en esto, proceder a repararlos.

Por todo lo expuesto, declaro admisible la demanda iniciada por Ramón Fidel Lucena en contra de la empleadora Giacosa A Y E SRL y de Galeno ART S.A., a las que condeno solidariamente a reparar integralmente el daño sufrido por aquél por el infortunio laboral y con base en la normativa civil. Así lo declaro.

En su mérito, corresponde rechazar la defensa de falta de acción opuesta por la codemandada en su responde. Así lo declaro.

**Tercera cuestión:** procedencia o no de los rubros e importes reclamados.

1. El actor reclamó el pago de la suma de \$5.198.105 (pesos cinco millones ciento noventa y ocho mil ciento cinco) o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos, con más sus intereses, gastos y costas, en concepto de daño patrimonial y de daño moral.

Cabe analizar entonces la procedencia de dichos conceptos reclamados y, en su caso, su cuantificación.

2.1. En primer lugar, es dable destacar que la persona trabajadora es sujeto de tutela constitucional cuando se vulneran sus derechos y libertades por un conflicto entre la aplicación de diversos métodos de valuación del daño sufrido.

En este supuesto pareciera enfrentarse, por un lado, el principio de seguridad jurídica y, por el otro, el principio de reparación integral y su proyección en una cuantificación justa y adecuada.

Ahora bien, cuando la pretensión de reparación se encuentra en el marco del Derecho Civil -como en el caso- la cuantificación del daño integral y en especial del daño moral queda librada a la prudencia, razonabilidad y mesura del juzgador.

Asimismo, el hecho de que la reparación integral no esté tarifada (como sí ocurre en la Ley de Riesgos del Trabajo), no significa que deba prescindirse de datos objetivos.

Se entiende que es íntegra, en el sentido de que debe considerar no sólo el daño en el patrimonio del trabajador, sino, fundamentalmente, que la persona debe ser protegida en la integridad de su proyección.

Ello es así, en la inteligencia de que, desconocer o dejar de lado algún daño cierto, implicaría vulnerar la protección que supone un derecho fundamental resguardado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de igual jerarquía.

A su vez, la remisión al derecho común debe entenderse, en la actualidad, al regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, de donde resultan aplicables a la indemnización de daños y perjuicios las normas relativas a la “función resarcitoria” de los 1716 a 1736, como al daño resarcible regulado en los arts. 1737 a 1748 de dicho cuerpo legal.

De allí se desprende la regla general de la reparación plena del daño (art. 1740, CCCN).

Esto se traduce en la indemnización de la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo con la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances; las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resulta de la interferencia en su proyecto de vida (art. 1738, CCCN).

Incluye, asimismo, las consecuencias no patrimoniales (art. 1741, CCCN). Conforme lo señala la doctrina, actualmente, el daño no patrimonial debe entenderse como “equivalente al usualmente denominado daño extrapatrimonial o moral, por oposición al patrimonial” (Galdós, Jorge Mario, en Ricardo Luis Lorenzetti [Dir.], Código Civil y Comercial de la Nación comentado, 1 ed., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, t. VIII, pp. 498-504).

Para la determinación del daño material, conforme fue propuesto por el demandante, estimo equitativo apelar a la fórmula empleada en el caso “Méndez” según la cual, corresponde partir de la edad del trabajador, de 58 años al momento de la pericia médica del Dr. Perseguino -por ser la más actual-, y el porcentaje de incapacidad determinado del 40%. Asimismo, deben considerarse los años de vida útil, que se toman en 75 años (edad tope para la aplicación de la fórmula “Méndez”), con más los intereses moratorios devengados desde la fecha del evento dañoso, 30/06/16, y hasta su efectivo pago. Así lo declaro.

La tasa de interés y el monto resultante de este rubro se precisará en la cuarta cuestión.

2.2. En lo relativo al daño extrapatrimonial, considero que, dada la índole del daño moral debe tenérselo por configurado por la sola producción del evento dañoso, ya que se presume la lesión a los sentimientos de la demandante.

A los fines de la fijación del *quantum*, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 316:2894; 321:1117; 325:1156; 326:820 y 847).

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, para evaluar la reparación integral del daño, fundando en el Derecho Civil, que padece un trabajador (“Aquino”, Fallos: 327:3753) “no se trata, pues de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas. Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres”.



En el caso, la edad del trabajador a la fecha del siniestro, el tipo de tareas que realizaba, así como la incapacidad resultante de la patología padecida, son factores ponderables que permiten inferir que la contingencia le trajo aparejadas consecuencias de índole moral resarcibles.

Es dado señalar que, en la demanda, el actor reclamó en concepto de daño moral la suma de \$1.200.000 que estimó adecuada y proporcionada con la entidad del daño sufrido.

Conforme con la plataforma fáctica denunciada y probada en la causa, y las particulares circunstancias del caso expresadas en esta resolución, resulta procedente la indemnización por daño moral por la suma demandada con más los intereses moratorios, devengados desde la fecha del siniestro, 30/06/16, y hasta su efectivo pago (cfr. CSJTuc., Sentencia N° 1111 del 01/07/2019, “Yapura Silvia Patricia vs. Auad Carlos Alberto y Otros s/ Daños y perjuicios; “Vargas Ramón Agustín vs. Robledo Walter Sebastián s/ Daños y perjuicios”, Sentencia N° 1487 del 16/10/2018, entre otras). Así lo considero.

La tasa de interés y el monto resultante de este rubro se establece seguidamente al tratar la cuarta cuestión.

**Cuarta cuestión:** Intereses. Planilla. Costas. Honorarios.

**Intereses:** para el cómputo de los intereses de los rubros admitidos se aplica el método de la tasa activa. Ello, según la doctrina legal sentada por nuestra CSJT los autos “Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones” (sentencia 1422, 23/12/2015), en la que el Alto Tribunal ratifica la decisión de abandonar su anterior doctrina sobre la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. CSJT, sentencias 937, 23/09/2014; 965, 30/09/2014; 324, 15/04/2015; entre otras).

Asimismo, en cuanto expresa que los jueces deben dictar pronunciamientos de conformidad a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevivientes: "En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de

descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago".

En su mérito y con base en lo dispuesto por el artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, considero que deviene razonable la aplicación de dicha tasa. Así lo declaro.

En tal sentido, reitero, las sumas adeudadas devengarán tales intereses desde el 30/06/16, fecha del accidente que provocó la enfermedad profesional del actor, y hasta su efectivo pago. Así lo declaro.

Planilla de capital e intereses:

Lucena Ramón Fidel - Giacosa A y E S.R.L.

**Remuneración devengada**

		jun.-16
Básico	\$	13.125,47
Antigüedad	\$	2.887,60
Presentismo	\$	1.334,42
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>17.347,50</b>

**Fórmula Méndez**

donde:

$$Indemnización = \frac{a * (1 - V^n)}{i}$$

$$a = \text{salario mensual} \times \frac{60}{\text{edad del accidentado}} \times 13 \times \% \text{ de incapacidad}$$

$$a = \$17,347,50 * \frac{60}{58} * 13 * 40,00\%$$

$$a = 93,317,5657 \quad i = 4\%$$

$$n = 75 - \text{edad del accidentado}; V^n = \frac{1}{(1 + i)^n}$$

$$n = 17 \qquad V^n = \frac{1}{(1 + 4\%)^{17}} = 0,513373$$

$$Indemnización = \frac{93,317,5657 * (1 - 0,513373)}{0,04}$$

$$Indemnización \text{ al } 30 - 06 - 2016 = \$1.135.270,60$$

<b><i>Daño patrimonial al 30/06/2016</i></b>		<b><i>\$1.135.270,60</i></b>
<i>Interés tasa activa BNA al 31/01/2024</i>	<i>404,11%</i>	<i>\$4.587.699,27</i>

<b><i>Daño moral al 30/06/2016</i></b>		<b><i>\$1.200.000,00</i></b>
<i>Interés tasa activa BNA al 31/01/2024</i>	404,11%	\$ 4.849.274,80
<b><i>Total \$ al 31/01/2024</i></b>		<b><i>\$ 11.772.244,67</i></b>

**Costas:** atento al resultado arribado en autos las costas se imponen en su totalidad, de forma solidaria, a las codemandadas Giacosa A Y E SRL y Galeno ART S.A., en virtud del principio objetivo de la derrota. Ello, según lo normado por los arts. 14 y 49 del CPL, y 61 del CPCC (supletorio). Así lo declaro.

Honorarios: corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el artículo 46 inc. 2 del CPL.

Atento al resultado del juicio y a la naturaleza de la misma, es de aplicación el artículo 50 inc. 1 del CPL por lo que corresponde tener como base regulatoria el monto de la condena, que según planilla precedente resulta al 31/01/2024 en la suma de \$11.772.244,67.

De acuerdo con la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito, lo dispuesto por los arts. 12, 14, 15, 39, 43 y concordantes de la Ley 5480, con los topes y demás pautas impuestas por la Ley 24.432 ratificada por la Ley provincial 6715, se regulan los siguientes honorarios:

1. Al letrado Federico José Domínguez (M.P. 5421) por su actuación en la causa como apoderado del actor, en las tres etapas del proceso de conocimiento, en la suma de \$712.221 (base x 11% x 55%).
2. Al letrado Eduardo Alberto Posse Cuezco (M.P. 1953) por su actuación en la causa como patrocinante, en la suma de \$1.294.947 (base x 11%).
3. Al letrado Máximo Augusto Castro (M.P. 4478) por su actuación en la causa como apoderado de la demandada, en el doble carácter, en las tres etapas del proceso de conocimiento, en la suma de \$1.094.819 (base x 6% + 55%).

4. A la letrada Micaela Barrionuevo Castro (M.P. 8919) por su actuación en la causa como apoderada de la codemandada, en el doble carácter, en una etapa y media del proceso de conocimiento, en la suma de \$547.409 (base x 6% + 55%/3 x 1,5).

5. Al letrado Germán José Nadeff (M.P. 7000) por su actuación en la causa como apoderado de la codemandada, en el doble carácter, en media etapa del proceso de conocimiento, en la suma de \$182.470 (base x 6% + 55%/3 x 0,5). Por aplicación de lo normado por el artículo 38 in fine, Ley 5480, corresponde regular honorarios en la suma de \$250.000 (valor de una consulta escrita a la fecha del dictado de la presente resolución).

6. Al perito médico Dr. Juan Carlos Perseguino, por la labor llevada a cabo en autos, en la suma de \$235.445 (2% de la escala que fija el art. 51 del CPL).

7. Al perito calígrafo José Luis Rodríguez, por la labor llevada a cabo en autos, en la suma de \$117.722 (1% de la escala que fija el art. 51 del CPL).

8. A la perita contadora Marcela Paola López, por la labor llevada a cabo en autos, en la suma de \$117.722 (1% de la escala que fija el art. 51 del CPL).

Por ello,

## **RESUELVO**

**I. DECLARAR** abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley 26.773; de los arts. 1°, 2°, 3°, 12, 14, 15, 16 y 21 de la Ley 27.348; de los arts. 6°, 8° inc. 3°, 21, 22 y 46 de la Ley 24.557; del Dto. 54/17, en los términos planteados por la parte actora.

**II. ADMITIR LA DEMANDA** incoada por Ramón Fidel Lucena, DNI 16.691.923, domiciliado en calle José Ingenieros N° 1200, B° Tiro Federal, San Miguel de Tucumán, en contra de Giacosa A Y E SRL, con domicilio en calle Marina Alfaro N° 1215, y de Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 732, de esta ciudad. En consecuencia, se condena solidariamente a las codemandadas al pago de la suma total de **\$11.772.244,67** en concepto de reparación integral por daños y perjuicios.

**III. COSTAS** a las codemandadas vencidas.

**IV. REGULAR HONORARIOS** por el proceso de conocimiento al Federico José Domínguez (M.P. 5421) en la suma de \$712.221 . Al letrado Eduardo Alberto Posse Cuezso (M.P. 1953) en la suma de \$1.294.947. Al letrado Máximo Augusto Castro (M.P. 4478) en la suma de \$1.094.819. A la letrada Micaela Barrionuevo Castro (M.P. 8919) en la suma de \$547.409. Al letrado Germán José Nadeff (M.P. 7000), en la suma de \$250.000.

**V. REGULAR HONORARIOS** al perito médico Dr. Juan Carlos Persequino en la suma de \$235.445. Al perito calígrafo José Luis Rodríguez, en la suma de \$117.722. A la perita contadora Marcela Paola López en la suma de \$117.722.

**VI. PLANILLA FISCAL**, oportunamente practicar y reponer (art. 13, Ley 6204).

**VII. COMUNICAR** a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán.

**PROTOCOLIZAR Y HACER SABER.** SIE 1709/18 **FIRMADO DIGITALMENTE**

**Certificado Digital:**

CN=ROMERO María Constanza, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27281824126, Fecha:02/02/2024;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>